

«La crisis política»

FRANCISCO LLERA RAMO¹

Universidad del País Vasco

No resulta fácil hablar de crisis política en una coyuntura tan cargada por los efectos de la crisis económica y las enormes dificultades de su gestión. Con todo, las tomas de posición y la forma con la que los actores políticos se enfrentan a su evolución, y los sobresaltos que ocasiona, son altamente reveladoras de una crisis política más profunda y que viene de largo en la democracia española. La crisis política en España está relacionada con la progresiva pérdida del consenso o la política de acuerdos en temas básicos o de Estado, que tan buenos resultados produjo en la Transición democrática y que dieron lugar hace 32 años a la Constitución más duradera y apoyada de la historia española. Esta dinámica conflictiva entre los principales actores políticos complica las relaciones institucionales, dificulta la resolución de los problemas, merma los rendimientos del sistema político y fatiga a la propia sociedad en relación con la política. El malestar democrático que se genera distorsiona la percepción que los ciudadanos tienen de la política, desgasta sus formas de vinculación, degrada la representación política y puede afectar a la propia convivencia social. De este modo, se puede pasar de una crisis política, más o menos coyuntural, a otra crisis de la política, más profunda y de largo recorrido. Estaríamos hablando en este caso de desafección política y, eventualmente, de crisis de legitimidad política. La primera estaría más vinculada a la imagen y los apo-

¹ En este trabajo se recogen algunos de los resultados del proyecto de investigación SEJ2006-15076-C03-01, siendo posible también gracias a la financiación que el equipo de investigación *consolidado* ha obtenido del Gobierno Vasco (IT-323-07).

yos de los principales actores políticos o algunas instituciones fundamentales, mientras que la segunda sería más sistémica y afectaría a la propia democracia o su estabilidad constitucional.

1. TRES DÉCADAS DE DESPLIEGUE INSTITUCIONAL Y EJERCICIO DEMOCRÁTICO

Han pasado más de treinta años desde el inicio de la Transición democrática española, la celebración de las primeras elecciones democráticas y la aprobación de la Constitución en 1978. En estas tres décadas largas la ciudadanía española ha definido sus preferencias y reafirmado su pluralismo político, se han constituido los patrones básicos de su comportamiento electoral y se han desplegado las dimensiones competitivas de su sistema de partidos, contribuyendo con ello a su institucionalización y a la consolidación del sistema democrático. El sistema político español, surgido de la Constitución de 1978 y de la política consociativa de la transición democrática, ha protagonizado una profunda y amplia transformación, pero, sobre todo, una de las mayores innovaciones en los procesos políticos de las democracias avanzadas, ligada a su proceso de descentralización. Así, el 80% de nuestros entrevistados² recuerda con orgullo la forma en que se llevó a cabo esta transición y casi otro tanto (82%) piensa que su éxito fue posible gracias al espíritu de consenso y sentido de la responsabilidad de los líderes políticos. Hasta tal punto que sólo un 5% valora negativamente la Constitución de 1978 y la mayoría piensa que, aunque sigue siendo válida, no le vendrían mal algunos retoques (58%).

En efecto, el nuevo sistema institucional había logrado conjurar todos los peligros de los fantasmas históricos nacionales, suturando las heridas de viejas fracturas: monarquía/república, clericalismo/aconfesionalidad, campo/ciudad, tradicionalismo/modernidad, lucha de clases/concertación social, analfabetismo/escolarización universal. En un amplio y costoso proceso de modernización en todos los ámbitos, España logra reducir sus desigualdades sociales y, sobre todo, reestructurar su viejo aparato productivo para responder a las exigencias de su integración en la Unión Europea, en un ambiente de conflictividad social moderada.

No obstante, la fractura que se mantenía más activada en ese momento era la de la vieja cuestión territorial e identitaria, azuzada por las tensiones con los nacionalismos periféricos y, sobre todo, por el azote del terrorismo. También en esto, las elites de la transición encontraron la fórmula del Estado de las Autonomías, actualizando la solución adoptada en la II República. La intensa y rápida descentralización y su peculiar forma de organización territorial, que trata de combinar la mayor cohesión del Estado unitario y la funcionalidad de un federalismo avanzado de carácter asimétrico, han definido lo que se podría llamar, sin exageración alguna, el «excepcionalismo español».

² Nos referimos a la encuesta «Pulso de España 2010», realizada por Metroscopia.

Todo ello ha sido posible gracias a una estabilidad y rendimiento gubernamental envidiables. Diez legislaturas, cinco primeros ministros y tres alternancias con cambio de mayoría. La durabilidad media de los gobiernos españoles es superior al promedio europeo continental, en donde difícilmente se conocen, por lo demás, gobiernos monocolors. La gobernabilidad europea continental está caracterizada por los gobiernos de coalición, algo absolutamente desconocido en la arena nacional española (aunque sea lo normal en algunas arenas regionales). Por si fuera poco, ni en las democracias continentales, ni en las anglosajonas, sean proporcionales o mayoritarias, se conciben los gobiernos en minoría, en tanto que en España se alternan, casi por igual, los gobiernos monocolors minoritarios (1977, 1979, 1993, 1996, 2004 y 2008) y los de mayoría absoluta (1982, 1986, 1989 y 2000). A todo ello han contribuido algunos mecanismos institucionales como los efectos mayoritarios del sistema electoral o la censura/confianza constructiva, pero, sobre todo, la capacidad de concertación de las elites políticas y la moderación y pragmatismo mayoritarios de la ciudadanía española. Se puede decir, por tanto, que, con mecanismos propios de los sistemas de pluralismo proporcional continentales, la gobernabilidad española es más parecida a la del mundo mayoritario anglosajón, si bien con la especificidad de una cultura política de las elites cada vez más orientada al disenso que al consenso, a diferencia de la anglosajona. Con todo, casi tres cuartas partes de la ciudadanía española (72%) consideran estas tres últimas décadas de democracia como el mejor período histórico de España (frente a un 21% que no lo ven así).

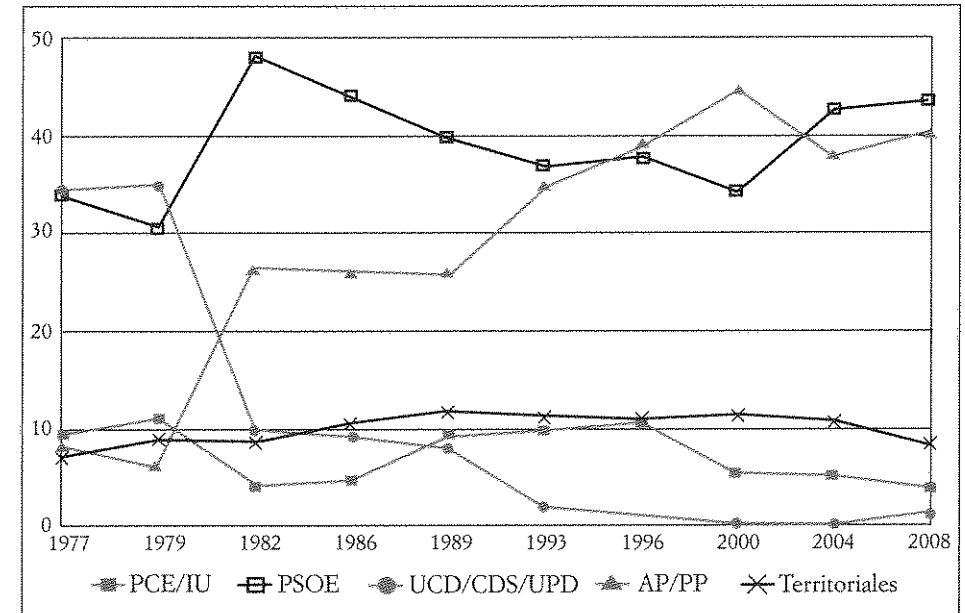
Este largo y exitoso recorrido no ha estado exento de momentos, más o menos agudos, de crisis e inestabilidad. A parte de los producidos por el azote, casi endémico, del terrorismo, sobre todo, local, el sistema político ha tenido que superar momentos críticos como la dimisión de Adolfo Suárez y la ruptura de su partido (UCD), el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, las crisis de las reconversiones industriales y la modernización económica de los años ochenta, la etapa final de los gobiernos de Felipe González acosado por los escándalos de corrupción, la impugnación soberanista de nuestro modelo constitucional iniciada por el Pacto de Lizarra y el llamado «Plan Ibarretex» o el final dramático del gobierno de José M^a Aznar tras el atentado yihadista del 11 de marzo de 2004 en Madrid, entre otros. Todos esos malos momentos han podido afrontarse desde la fortaleza institucional, el apoyo y la moderación ciudadanos y la responsabilidad de las elites. Pero el clima de competición política moderada y centrípeta ha ido deteriorándose con el tiempo y la capacidad para la concertación entre las elites se ha resentido seriamente en las últimas etapas y, muy particularmente, en relación con la actual crisis económica o la que podríamos llamar crisis constitucional, ligada, precisamente, a la cuestión territorial.

2. EL CONTEXTO: LOS CAMBIOS EN EL SISTEMA DE PARTIDOS

En una democracia de partidos el sistema de partidos formaliza la estructura de la competencia política de un país y condiciona las relaciones interpartidistas y entre los actores políticos e institucionales más relevantes. La estabilidad relativa del sistema político español y su gobernabilidad han convivido con la inestabilidad de la estructura de la competencia partidista. En poco más de 30 años el sistema ha cambiado tres veces, como se muestra en el Gráfico 1. En las dos primeras legislaturas el sistema es de pluralismo moderado con dos partidos nacionales (UCD y PSOE) con alrededor de dos tercios de los votos y muy igualados en sus apoyos electorales (con alrededor de un tercio de los votos cada uno), otros dos partidos del mismo ámbito en torno al 10% cada uno (PCE y AP) y un conjunto de partidos territoriales también en torno al 10%. El sistema cambió en 1982. La espectacular caída y fragmentación de UCD y PCE y el extraordinario crecimiento del PSOE transformaron el sistema de pluralismo moderado en otro de partido dominante, pudiéndose observar la gran distancia competitiva entre éste y AP (de los 22 puntos de 1982 a los 14 puntos en 1989), convertido en segundo partido y que con José M^a Aznar al frente iniciaría su «viaje al centro». Este sistema se mantendría en las tres legislaturas siguientes, aunque atenuado en 1989, cuando ya se empezaba a atisbar el cambio que vendría a partir de 1993 con el actual sistema de bipartidismo imperfecto, según el cual los dos grandes partidos nacionales concentran más votos y representación parlamentaria en cada elección (del 74% de los votos válidos en 1993 al 84% en 2008). Este sistema es el que sigue hoy presente y consiste en la alternancia en el poder entre PSOE y PP con determinados partidos territoriales ejerciendo de bisagras y haciendo valer su capacidad de «chantaje» en la formación de mayorías. La paradoja ha sido que este intercambio de apoyos, nacionales o territoriales, entre los grandes partidos nacionales y los más importantes partidos nacionalistas o regionalistas ha servido para dotar de estabilidad y asegurar la gobernabilidad del país, pero a costa de la estabilización del modelo autonómico y del acomodo nacional, que ha producido la dinámica de adversarios entre los grandes partidos nacionales. Dicho de otra manera, hoy los dos grandes partidos llamados a gobernar la Nación no están más cercanos, ni en la concepción ni en su práctica, sobre esta cuestión, ni sus actuales o potenciales socios nacionalistas han acrecentado su lealtad constitucional.

Son, precisamente, las tensiones competitivas que introduce el factor identitario-territorial las que más agudizan la dinámica de adversarios y de polarización de nuestro sistema partidista. La dinámica competitiva y polarizadora entre los grandes partidos nacionales se caracteriza por una clara política de adversarios que rompe el modelo consociacional (o consociativo), dominante durante la transición a la democracia y en el diseño constitucional de 1978, y que se aleja de las pautas de relación interpartidistas y de gobernanza de las democracias europeas más estables y consolidadas.

GRÁFICO 1.— Evolución del Sistema de Partidos en España (1977-2008)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio del Interior

3. LA MODERACIÓN DEL ELECTORADO Y LA POLARIZACIÓN DE LAS ELITES

El electorado español ha demostrado ser muy estable en sus preferencias políticas, a pesar de la inestabilidad de las ofertas partidistas en algunos momentos, con una volatilidad agregada media, relativamente, moderada de 12,6. Como en el resto de democracias avanzadas, la principal dimensión de competición en la arena nacional es el alineamiento izquierda-derecha de electores y partidos. De la evolución y clasificación agregada de los resultados electorales se deduce el ligero predominio del electorado de centro-izquierda, cuyo promedio de apoyo está en torno al 50% frente al 45% del centro-derecha, si incluimos también el alineamiento en uno u otro polo de los electorados de los partidos territoriales (éstos reparten su voto en 2/3 a las opciones de centro-derecha y en 1/3 a las de izquierda, por término medio). En conjunto, la izquierda ha oscilado entre el mínimo del 44% en 1977 y 2000 y el máximo del 54,5% de 1982, mientras que la derecha lo ha hecho entre el mínimo del 41% de 1982 y el máximo del 51,5% de 2000, mostrando un suelo y un techo ligeramente inferiores (alrededor de 3 puntos) que la izquierda. Una y otra se han impuesto siempre que han formado gobierno, aunque con la excepción de 1996 (con 5 puntos de diferencia a favor de la izquierda), siendo mayores las distancias entre ambas cuando gana la izquierda (entre el 7% de 2008 y el 13% de 1982) que cuando lo hace la derecha (entre el 2% de 1979 y el 7% del 2000). Finalmente, en la franja correspondiente a los partidos territoriales predomina, claramente, el voto de

centro-derecha (dos de cada tres), sobre todo de CiU y PNV, frente al de izquierda (uno de cada tres), también de una manera muy estable.

Tal evolución de la correlación de fuerzas ideológicas es muy coherente con la consistencia y la moderación centripeta que muestra la autoubicación de los distintos electorados de los partidos nacionales en la escala izquierda-derecha según los estudios maestres, que se reflejan en la Tabla 1. De ella se deduce, además de su gran estabilidad, la mayor concentración de electores en las posiciones de centro y centro-izquierda (UCD-PSOE entre 1977-79, PSOE-UCD-CDS entre 1982 y 1993 y PSOE-PP entre 1996 y 2004), definiendo una curva normal ligeramente sesgada hacia la izquierda (el promedio del conjunto del electorado en todas las elecciones es de 4,7). En segundo lugar, muestra la gran estabilidad y moderación de las posiciones de la izquierda, al tiempo que la evolución centripeta de la derecha en su proceso de homogeneización. De esta manera, la polarización pasa del 0,57 inicial (con un recorrido de 5 puntos entre el 2,6 promedio del electorado del PCE y el 7,7 del de AP) al 0,48 actual (con un recorrido de 4,4 puntos entre el 2,7 y el 7,1 entre ambos, respectivamente), con un promedio de 0,48. Sin embargo, el sistema de competición español está sometido a mayores tensiones polarizadoras, si tenemos en cuenta que, tanto el recorrido (la distancia entre las posiciones extremas) como los índices de polarización son superiores a los del promedio de las democracias avanzadas, sobre todo, hasta la aparición, en algunas democracias continentales, de las nuevas opciones de tipo populista, ultranacionalista o xenófobo. En efecto, si el recorrido medio de la polarización ideológica del electorado español es de unos 4 puntos, el de los electorados de las democracias occidentales más estables está en torno a la mitad.

Tabla 5: Autoubicación ideológica de los votantes de los partidos españoles e índices de polarización. 1977-2008*

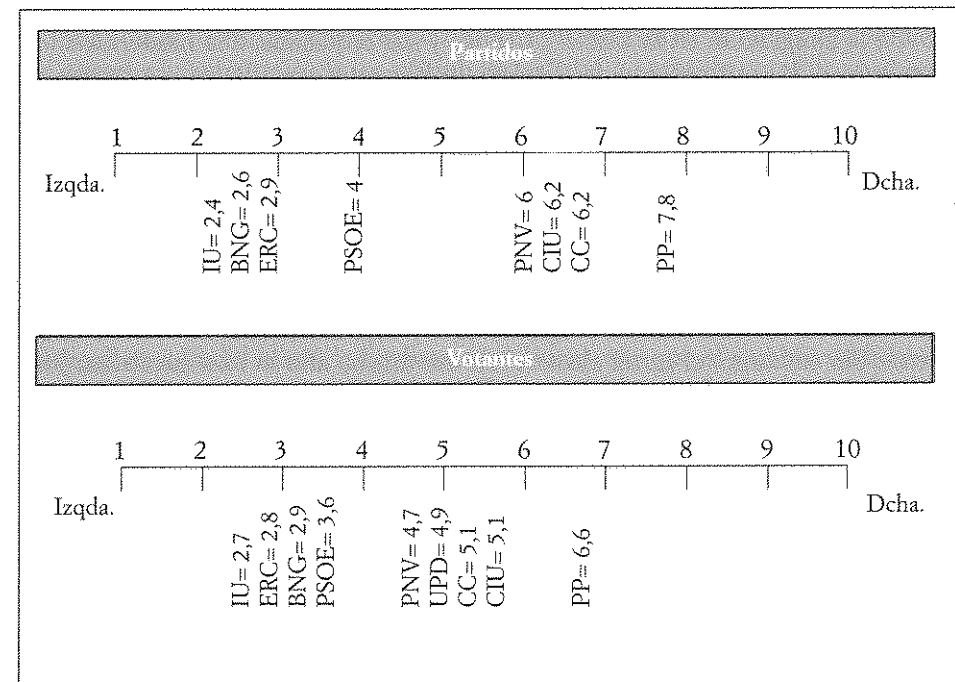
Partidos	1977	1979	1982	1986	1989	1993	1996	2000	2004	2008	- X
PCE/IU	2,6	2,7	2,3	2,5	2,6	2,6	2,9	3,1	2,9	2,7	2,7
PSOE	3,8	3,9	3,8	3,6	3,7	3,4	3,7	3,8	3,9	4,1	3,8
CDS	---	---	5,4	5,2	5,3	5,1	---	---	---	---	5,2
UCD	5,6	5,9	5,6	---	---	---	---	---	---	---	5,7
AP/PP	7,7	7,0	7,2	7,4	7,2	7,2	6,5	6,1	6,5	7,1	7,0
Electorado	4,7	4,8	4,8	4,4	4,6	4,7	4,7	4,9	4,6	4,6	4,7
(n)	(5.898)	(5.439)	(5.463)	(6.573)	(3.084)	(1.448)	(4.360)	(5.283)	(4.354)	(18.221)	---
Polarización	0,57	0,48	0,54	0,54	0,51	0,51	0,4	0,33	0,4	0,49	0,48

* Las cifras son posiciones medias en escalas de diez puntos.

Fuentes: Para 1977, Linz et al. (1981:368); para 1979, 1982 y 1993, Encuestas DATA, 1979, 1982 y 1993; y para los restantes años, Banco de Datos del CIS.

De nuevo, el *excepcionalismo español* reaparece en este indicador, no tanto referido a la polarización del electorado, cuanto a la de las elites u ofertas partidistas. En efecto, si aplicamos esta misma escala a la ubicación promedio que los votantes de cada partido le atribuyen al mismo y comparamos ambas evoluciones, se constata una clara mayor polarización partidista que del electorado. Esto contrasta con lo que viene sucediendo en las democracias más estables, en las que, justamente, la tendencia es hacia una menor polarización de las elites que de los electores en un claro contexto de moderación centripeta. Veamos este desajuste en la polarización comparada de electores y partidos, referida a las últimas elecciones legislativas de 2008, como muestra el siguiente Gráfico 2.

GRÁFICO 2.— Ubicación ideológica de los partidos y los votantes españoles en 2008 en el eje izquierda/dcha.



Fuente: CIS, 2008. Estudios n.º. 2.750 (partidos) y n.º. 2.757 (votantes)

Como se puede comprobar, aunque el sesgo polarizador afecta, en mayor o menor medida, a todos los electorados, es en los electorados del centro-derecha en los que más se acusa el desajuste. Obviamente, el que más afecta a la competición nacional por su protagonismo y su volumen es el del PP. Se entiende que es la tensión polarizadora de las elites la que está detrás de este fenómeno y, por tanto, es la instalación de una dinámica de *política de adversarios* la que lo puede explicar.

4. LA INSTALACIÓN DE LA POLÍTICA DE ADVERSARIOS Y LA CRISIS POLÍTICA

La autodestrucción de la UCD y la ausencia de competición izquierda-derecha en la etapa de gobiernos socialistas de mayoría absoluta con Felipe González al frente (1982-1993) dio lugar, como ya se ha dicho, a una fase política de sistema de partido dominante, en la que hunde sus raíces el cambio de orientación de la clase política desde el consenso anterior a una creciente conflictividad y falta de acuerdos. Por un lado, el PSOE y Felipe González tenían que hacer frente, casi en solitario (es una etapa de colaboración entre gobierno y nacionalistas vascos y catalanes), a la depuración de las responsabilidades del intento de golpe de Estado del 23-F de 1981 y la modernización de las Fuerzas Armadas, al proceso de institucionalización y consolidación del nuevo sistema constitucional, al inicio del proceso de descentralización con el despliegue del Estado de las Autonomías, a la integración en la Unión Europea y sus requisitos, a la modernización económica y la construcción del Estado de Bienestar vinculados al proceso de convergencia europea y a la lucha contra el terrorismo, entre otros. Por otro, el centro-derecha fragmentado (UCD, CDS, PDP, PL, AP y FN) y sin liderazgo claro se veía abocado a reorganizarse en una larga travesía del desierto hasta lograr colocarse en una posición competitiva, capaz de movilizar a su electorado y, finalmente, de disputarle la mayoría al PSOE.

En este «viaje al centro» desde la derecha, primero, se ensaya la fórmula de la coalición (CD en 1979 y CP en 1982) para, más tarde, dar lugar a su refundación como PP en 1989 con Manuel Fraga al frente y bajo la etiqueta de «centro reformista». Sin embargo, el cartel electoral de ese mismo año lo va a encabezar José M^a Aznar (tras su paso exitoso por la Presidencia de la Junta de Castilla y León). Sus buenos resultados como candidato a Presidente en las elecciones de 1989 lo llevarán a la presidencia del PP en la primavera de 1990. Desde ese momento, la falta de sintonía y entendimiento entre el Presidente del Gobierno y el nuevo jefe de la oposición fueron evidentes y el «váyase señor González» se convierte en el grito de guerra de la oposición popular, acompañada de la acción de desgaste, más o menos concertada, de importantes grupos mediáticos. De esta creciente confrontación *urbi et orbe* tan sólo se salvan los pactos autonómicos y los acuerdos antiterroristas de Madrid, Pamplona y Ajuria-Enea, por citar los más importantes, aunque con fecha de caducidad, cuando el PP y su apoyos mediáticos encuentran en ambos temas (la relación con los nacionalismos y la cuestión territorial y la lucha contra el terrorismo) un buen filón para la estrategia de acoso y derribo al gobierno de Felipe González.

La última legislatura socialista encabezada por Felipe González en 1993 fue la de la transición hacia el nuevo formato de un sistema de *bipartidismo imperfecto* en la competición nacional y en la que se consolidan las pautas de la *política de adversarios*. El gobierno del PSOE afronta las elecciones de 1993 acosado por la crisis social, las tensiones internas en su propio partido y los escándalos de corrupción y de los GAL. Por otro lado, el nuevo PP, liderado por José M^a

Aznar, una vez reorganizado todo el espacio político del centro-derecha, logra recuperar la tensión competitiva del primer período democrático. El PSOE vuelve a ganar las elecciones (38,8% de los votos y un 45% de los escaños) pero con una posición minoritaria (a 16 escaños de la mayoría absoluta), tras un ligero retroceso electoral, mientras que el PP recupera la posición inicial de la UCD (con el 34,8% de los votos y un 40% de los escaños). Pero, la legislatura acaba antes de tiempo por la pérdida de apoyos parlamentarios del gobierno de Felipe González, acosado por una oposición, política y mediática, inmisericorde y con consecuencias a largo plazo.

El recurso a la imagen del *doberman* en uno de los vídeos de campaña del PSOE, para calificar negativamente la amenaza de la vuelta inevitable de la derecha al poder, consagra, definitivamente, esta dinámica de adversarios. Las legislativas de 1996 son las elecciones de la segunda alternancia encabezada por el PP de José M^a Aznar, que las gana por solo 300.000 votos, viéndose obligado a formar un gobierno en minoría (se queda a 20 escaños de la mayoría absoluta) con el apoyo parlamentario de los nacionalistas, aun a costa de corregir su anterior aversión a este tipo de pactos y relaciones. Sin embargo, la desmovilización electoral de la izquierda, la crisis de liderazgo en el PSOE y la moderación mostrada por el PP en su primera legislatura refuerzan sus apoyos electorales hasta llevarle a la mayoría absoluta en las elecciones del 2000 (con el 44,5% de los votos y el 52% de la representación parlamentaria) y batir su record histórico con más de 10 millones de votos y sin necesidad de pactos con los nacionalistas. Cegados por los excelentes resultados electorales y los éxitos económico, antiterrorista y en la escena internacional, vuelven a un estilo político autosuficiente que agudiza la animadversión del resto de las fuerzas políticas, sin que el cambio de liderazgo en el PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente desde el 2000, facilitase el entendimiento entre ambos líderes y partidos. Tan sólo el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo de diciembre de 2000, que propició, entre otras cosas, el pacto Mayor-Redondo para las elecciones vascas de 2001 y el rechazo conjunto al llamado Plan Ibarretxe, se sale de este guión de confrontación total. Sin embargo, la radicalización de la política social (el decretazo), el alineamiento de Aznar con la política exterior del Presidente Bush y el envío de las tropas españolas a la guerra de Irak, junto con las tensiones con el nacionalismo vasco y catalán, no hicieron más que contribuir a elevar la escalada de la tensión. Por si fuera poco, la réplica socialista en el llamado Pacto del Tinell, que dio lugar al acuerdo del primer gobierno tripartito en Cataluña encabezado por Pascual Maragall en 2003 y en el que se excluía explícitamente al PP de los acuerdos para la inmediata reforma autonómica, instalaron un ambiente de crispación bastante desconocido hasta ese momento.

En ese ambiente de tensión previa y un final abrupto de la campaña electoral con el atentado del terrorismo yihadista del 11-M en Madrid a sólo tres días de las elecciones, el PSOE y José Luis Rodríguez Zapatero ganan las elecciones de 2004, con una importante movilización (76%) y a solo 12 escaños de la mayoría absoluta. La mala gestión de la crisis del 11-M por parte del gobierno de Aznar

supuso la movilización del electorado de izquierda (tres millones más de votos) y la pérdida de medio millón de votos por parte del PP, encabezado por su nuevo líder, Mariano Rajoy, truncando sus expectativas de continuidad. Rodríguez Zapatero da un giro sin precedentes en la política de alianzas del PSOE y opta por los apoyos de los partidos de izquierda (IU y nacionalistas) para sacar adelante una agenda política, marcadamente, radical. Fue ésta una legislatura de fuerte tensión entre los dos grandes partidos, fundamentalmente por el cuestionamiento por parte del PP de la legitimidad del triunfo socialista de 2004. Las elecciones de 2008 vuelven a reproducir prácticamente la misma correlación de fuerzas con un gobierno reforzado en sus apoyos (a sólo 7 escaños de la mayoría absoluta, tras batir su record histórico con más de 11 millones de votos) y con socios suficientes, tanto en la izquierda como en el nacionalismo, para poder seguir gobernando con comodidad. El fenómeno nuevo de estas elecciones es la irrupción parlamentaria, aunque de forma testimonial, de un partido nacional (la UPyD de Rosa Díez) con vocación de bisagra, por primera vez desde la desaparición del CDS y el intento fallido de la llamada operación reformista del PRD en 1986, y que nace, precisamente, cuestionando los efectos autodestructivos de la política de adversarios.

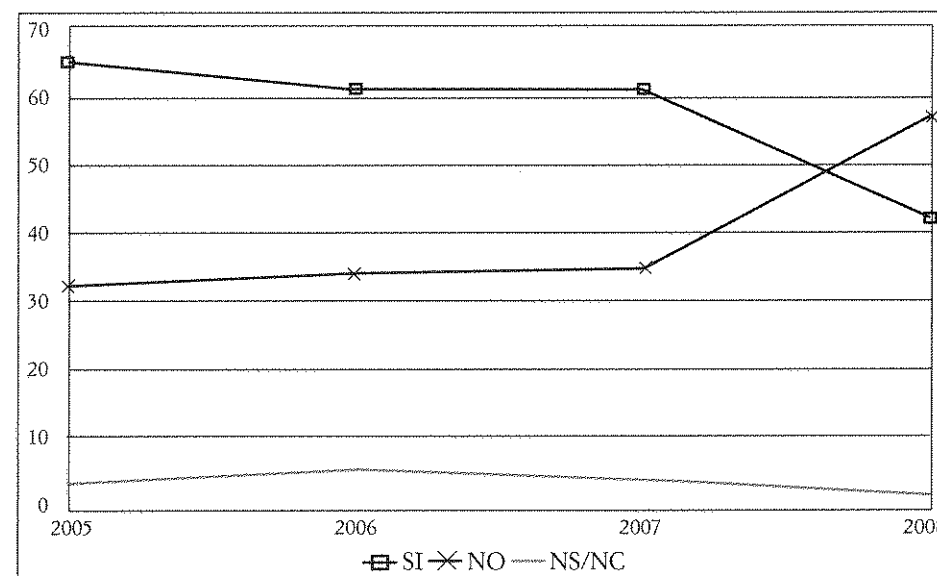
Los atentados yihadistas del 11-M de 2004 en Madrid marcaron seriamente la política española con un importante impacto en la opinión pública. El vuelco electoral en las elecciones generales tres días después dio paso a una legislatura caracterizada, precisamente, por la llamada «crispación política». Es una legislatura en la que la derecha política, mediática y sociológica, en un giro también sin precedentes, se echan a la calle con grandes manifestaciones contra las políticas del gobierno socialista (el diálogo con ETA, el matrimonio homosexual, el aborto, la educación para la ciudadanía, la memoria histórica o el Estatuto de Cataluña, entre otras). De este modo, se tensionaron, como nunca, las relaciones políticas entre las dos grandes fuerzas políticas nacionales (PSOE y PP) y esto afectó a la propia sociedad, tal como muestra el siguiente Gráfico 3, según el cual el 61% (frente a un tercio) de los españoles reconocía en 2006 y 2007³ que esa confrontación entre los partidos estaba produciendo tensión, discusiones y crispación en su entorno cotidiano inmediato, siendo algo que se percibía de forma mayoritaria en todos los electorados (desde el mínimo del 55% entre los votantes de IU hasta el máximo del 70% de los nacionalistas). Este clima, sin embargo, había cambiado significativamente al inicio de la nueva legislatura de 2008⁴, cuando la mayoría (57%) deja de percibir tal tensión frente a un significativo 42% que aún vivía la inercia anterior. No cabe duda de que el cambio en la política antiterrorista del gobierno y la vuelta al pacto entre los dos grandes partidos nacionales han debido ejercer al-

³ Nos referimos a los datos de nuestras III y IV Encuestas nacionales sobre «Los españoles ante el terrorismo y sus víctimas» de diciembre de 2006 y septiembre de 2007 (www.ehu.es/euskobarometro).

⁴ Nos referimos a los datos de nuestra V Encuesta nacional sobre «Los españoles ante el terrorismo y sus víctimas» de noviembre de 2008 (www.ehu.es/euskobarometro).

gún influjo positivo en este nuevo clima de apaciguamiento relativo, al menos, en lo que respecta a la lucha antiterrorista, uno de cuyos resultados positivos es el pacto de estabilidad entre ambos partidos para dotar de mayoría al gobierno socialista en el País Vasco en 2009. Pero la crisis constitucional larvada, provocada por la impugnación del PP al Estatuto de Cataluña y la sentencia tardía de un Tribunal Constitucional pendiente de renovación, precisamente, por falta de acuerdo entre los dos grandes partidos, ha neutralizado el bálsamo de los éxitos en la lucha contra el terrorismo. Finalmente, la irrupción brutal de la crisis económica y sus consecuencias, lejos de producir la concertación necesaria, han agudizado las tensiones hasta límites desconocidos. A la estrategia de la crispación del PP, respondería el PSOE y sus socios con el aislamiento de éste, para contraatacar aquél con la petición continua de elecciones anticipadas, como reedición del viejo «váyase señor González» y la descalificación recíproca entre ambos líderes y partidos.

GRÁFICO 3.— Evolución de la tensión social en España, 2005-2008



Fuente: «Los españoles ante el terrorismo y sus víctimas.» Encuestas nacionales de FVT / Euskobarometro (2005-2008)

5. LA SINTOMATOLOGÍA DE LA CRISIS: LA DESAFECCIÓN POLÍTICA

Se puede entender la desafección política como un conjunto de actitudes que distancian al ciudadano de la política, de las instituciones y de los políticos,

por una pérdida de confianza en los mismos para la resolución de los problemas (pérdida de expectativas) o por una simple incomprensión de los debates y relaciones protagonizadas por los actores políticos de referencia, sin que se llegue a poner en cuestión la legitimidad del régimen democrático. Todo ello genera un estado de malestar democrático, más o menos crónico, que enrarece la relación de los ciudadanos y ciudadanas con la política. De hecho y según nuestra encuesta⁵, tres cuartas partes de la ciudadanía española (78%) califica de mala la situación política (frente a uno de cada diez que piensa lo contrario), atribuyendo, mayoritariamente, la responsabilidad a los actuales líderes políticos (56%), aunque también a los mecanismos institucionales del sistema político (27%) o a ambas cosas por igual (13%). En el siguiente Gráfico 4 del CIS se muestra la evolución de los principales indicadores de confianza política, situación actual y expectativas, mostrando el mal momento actual en comparación con la serie iniciada al final del ciclo político de los gobiernos de Felipe González.

GRÁFICO 4.— *Indicadores de la situación política*



⁵ Nos referimos a la encuesta «Pulso de España 2010», realizada por Metroscopia.

A finales de la legislatura anterior, había un 42% de españoles —un nivel bastante desconocido hasta esa fecha— que se mostraba insatisfecho con el funcionamiento de nuestra democracia⁶, sobre todo, entre los votantes de la derecha (58%) y los nacionalistas (54%), pero también en el electorado de la izquierda (del 28% socialista al 42% de IU) o los abstencionistas (44%). En este momento y según nuestra encuesta⁷, los políticos (con un 3,8 en una escala de 10 puntos) y los partidos políticos (con un 3,5) ocupan los últimos lugares en el *ranking* de confianza de distintas instituciones y grupos sociales, algo que viene siendo ya crónico, pero que se agudiza, hasta el punto de que nunca el Presidente del Gobierno y el Jefe de la Oposición han tenido simultáneamente valoraciones tan negativas (3,9 y 3,8, respectivamente) y con niveles de confianza tan bajos (un 17% y un 16%, y un 39% y un 49% de sus electorados respectivos)⁸.

La ciudadanía atribuye a los partidos y la clase política este desafecto porque les considera más preocupados por sus problemas de poder o partido. Así, en nuestra encuesta⁹, el 89% opina que, cada vez más, los partidos tienden a pensar solo en lo que les beneficia o interesa a ellos y por eso no tienen en cuenta las demandas de la gente corriente (82%), porque su funcionamiento actual impide que se reclute para la política a las personas más competentes y mejor preparadas (79%). Por otro lado, se les ve demasiado enredados en sus enfrentamientos recíprocos y esto, como muestra el siguiente gráfico 5, lo valora muy negativamente, y de forma casi unánime, la opinión pública española. El pragmatismo y la moderación de la ciudadanía española llega al punto de demandar, de forma casi unánime (84%), a la clase política que, cuando hay problemas urgentes que resolver, lo más importante es que busquen soluciones prácticas y de la forma más rápida posible, aun a costa de sacrificar sus principios ideológicos. Como ejemplo concreto de un tema que tanta división y desgaste había producido, en lo que fue también casi unánime la opinión pública española en 2008, era en el apoyo al acuerdo entre PSOE y PP en materia de política antiterrorista (89%) y la necesidad de revitalizar el pacto por las libertades y contra el terrorismo (88%), reforzando la eficacia y persecución policial y judicial y la tolerancia cero con quienes apoyan o justifican el terrorismo en el País Vasco¹⁰.

⁶ Encuesta de nuestro Equipo EUSKOBAROMETRO de la UPV sobre la base de una muestra aleatoria de 1.035 entrevistas realizadas en noviembre y diciembre de 2007 para el proyecto SEJ 2006-15076.

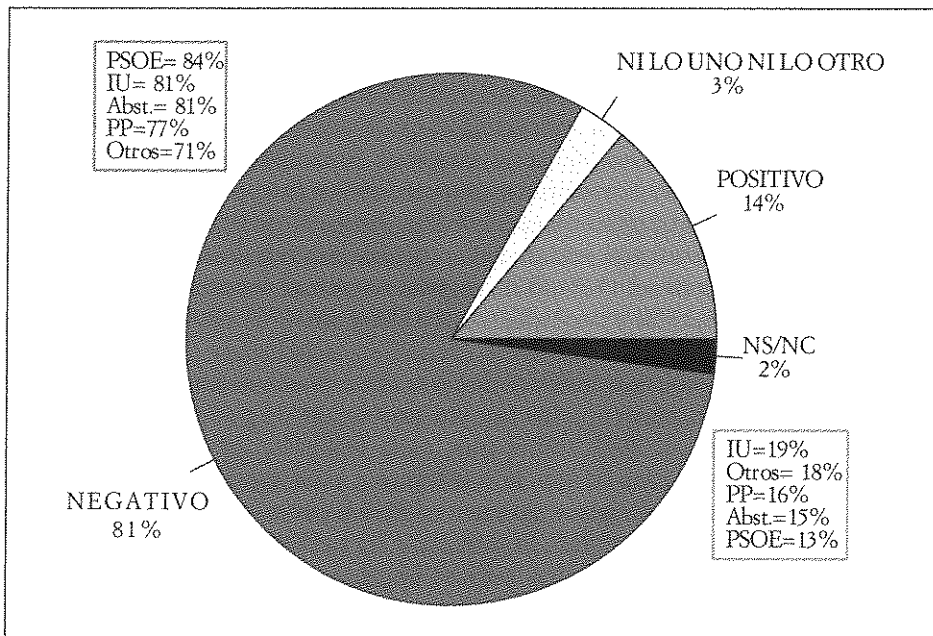
⁷ Nos referimos a la encuesta «Pulso de España 2010», realizada por Metroscopia.

⁸ Según el estudio n.º 2.847 de Octubre de 2010 del CIS.

⁹ Nos referimos a la encuesta «Pulso de España 2010», realizada por Metroscopia.

¹⁰ Nos referimos a los datos de nuestra V Encuesta nacional sobre «Los españoles ante el terrorismo y sus víctimas» de noviembre de 2008 (www.ehu.es/euskobarometro).

GRÁFICO 5.— Opinión sobre las relaciones enfrentadas PP-PSOE*



Fuente: Euskobarómetro SEJ 2006-15076. Encuesta de Cultura y Representación Política en España, 2007.

* Una de las características de nuestra Transición Democrática ha sido la obtención de grandes acuerdos entre los partidos y líderes políticos en cuestiones llamadas de Estado. Esto ha ido cambiando con el tiempo. ¿Hasta qué punto considera UD. muy o bastante positivo o, por el contrario, muy o bastante negativo para nuestra democracia el que, en concreto, PSOE y PP mantengan posiciones claramente enfrentadas en todo o casi todo?

De ahí que se vuelva a rozar la unanimidad (88%) al considerar que los principales partidos han abandonado el espíritu de consenso de la Transición y sólo piensan en sus exclusivos intereses partidistas, con independencia de lo que pueda ser más conveniente para el conjunto de la sociedad española. Igualmente, una mayoría cualificada de casi tres cuartas partes (73%) piensa que España necesita una «segunda Transición», que con el mismo espíritu de pacto y concordia de la primera, acometa la modificación y actualización de muchos aspectos del sistema político actual. En concreto, deberíamos fijar especialmente la atención en la evaluación actual del Estado de las Autonomías y en las nuevas tensiones que ya está generando la evolución de la cuestión territorial, que tanto potencial desestabilizador tiene para nuestro sistema constitucional.

6. A MODO DE CONCLUSIÓN: RECUPERAR EL PULSO Y REORIENTAR EL RUMBO

El malestar democrático entre la ciudadanía española es palpable en la calle o en los medios de comunicación, sin que sea necesario recurrir a la investigación demoscópica, pero ésta nos ayuda a identificar los puntos críticos de nuestro funcionamiento institucional y, eventualmente, a vislumbrar posibles correcciones en el rumbo. Caben pocas dudas sobre que sea el déficit de consenso interpartidista y el predominio de la orientación conflictiva de las élites políticas los que más fatiga vienen introduciendo en el funcionamiento del sistema democrático, en general, y, sobre todo, más distorsionan la relación fluida y satisfactoria de los ciudadanos y ciudadanas con la política.

Como se ha visto, el problema viene de largo y está relacionado con la forma en que el relevo generacional de nuestra clase política ha ido reorientado la competición en las dos últimas décadas. La sociedad española, plural pero claramente moderada y pragmática, no parece resignada a que este cambio y esta conducción no puedan ser revertidos, en una suerte de determinismo histórico. Sin embargo, esta crisis política larvada ha llegado a un punto en el que han empezado a encenderse las alarmas y que, sin dramatismo alguno, puede convertirse en una enfermedad tumoral, y no benigna, para el buen rendimiento de nuestro sistema constitucional.

Encarrilada, al menos por el momento, la lucha contra el terrorismo, que no pocos quebraderos de cabeza y desgaste ha producido, nos enfrentamos, y no en las mejores condiciones de confianza y consenso posibles, a una crisis económica y del modelo productivo sin precedentes y de solución inaplazable. Por otro lado, esta misma crisis, en lo que tiene de déficit de las finanzas públicas, ha hecho fijar la atención sobre las ineficiencias del proceso descentralizador, sin que éste haya encontrado todavía el acomodo necesario y haya concentrado los mayores niveles de disenso constitucional en los últimos tiempos.

Aunque se han reiterado discursos y agendas de regeneración democrática, lo cierto es que se han quedado en el cesto de las buenas intenciones y los esfuerzos no han ido por ese camino. La solución sólo es posible, aunque no sea fácil y sin costes, con un simple cambio en la voluntad de las élites políticas para dejar atrás las estrategias de confrontación *urbi et orbe* y la reorientación del rumbo hacia la concertación en todo aquello que más nos debe unir políticamente. En estas encrucijadas históricas es cuando la recuperación del pulso del liderazgo se hace más necesaria.